

LUIS MAIRA AGUIRRE*

LAS RELACIONES ENTRE
AMÉRICA LATINA Y ESTADOS UNIDOS:
BALANCE Y PERSPECTIVAS**

EL CARIBE Y AMÉRICA CENTRAL EN LOS ORÍGENES DE LA
EXPANSIÓN IMPERIAL NORTEAMERICANA

Si se examinan con una perspectiva histórica las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, estas aparecen como bastante más estables y con mayor continuidad de lo que un examen coyuntural sugiere. Desde que en la segunda y tercera década del siglo XIX los países latinoamericanos afianzaron su independencia del imperio español, sus nexos con el mayor país del hemisferio norte han sido asimétricos, dependientes y de una importancia secundaria para los formuladores de la política en Washington. Esto sólo encuentra excepciones en ciertos cuadros de crisis que muy ocasionalmente se producen en los países latinoamericanos. El resto del tiempo, prevalece un curso rutinario, donde las determinaciones están encomendadas a funcionarios de mediano nivel del Departamento de Estado que

* Actual embajador de Chile en Argentina. Ex ministro de Planeamiento y Cooperación de Chile. Profesor en México, Río de Janeiro y Buenos Aires.

**Este artículo fue previamente publicado en *Revue Générale de Stratégie-L'Amérique Latine en demi-teinte* bajo el título "Les relations avec les États-Unis", en octubre de 2003.

manejan caso a caso las situaciones que enfrentan los diversos gobiernos del Sur.

Muy pronto se estableció entre los responsables de definir la política exterior el principio central de sus conductas: combinar *zanahorias y garrotes*, siguiendo la experiencia que los aldeanos de las trece colonias situadas junto al Atlántico empleaban para hacer caminar a sus burros; un estímulo para lograr el paso adecuado del animal, acompañado por un castigo si no se cumplían las instrucciones del amo. Lo que ha variado de una etapa a otra ha sido sólo la proporción de incentivos y penas. Pero en la base del pensamiento realista, que sirve de marco teórico a las decisiones externas de los burócratas norteamericanos en su política internacional, siempre ha existido la convicción de que una gran potencia debe imponer sus criterios a las naciones menores y que, para obtener este objetivo, es el comportamiento del país en cuestión el que determina el tipo de tratamiento que recibe.

La asimetría entre las dos áreas tiene sus raíces en las fases finales del período colonial que conocieron la América anglosajona y la América latina (Hanke, 1964). Los historiadores norteamericanos subrayan el carácter individualista de la conquista y colonización de la América del Norte. Louis Hartz (1955) ha hecho célebre la expresión *sociedad-fragmento* para señalar que el poblamiento de las colonias del este de EE.UU. se hizo en base a contratos individuales realizados por modernas compañías de colonización que transportaron, a través del Atlántico, a colonos que traían el capitalismo en sus huesos y buscaban reproducir las condiciones de una Inglaterra que ya preparaba la primera revolución industrial. En la América española y portuguesa, en cambio, se mezclaron criterios de evangelización religiosa y dominio imperial que dieron origen a sociedades mucho más atrasadas y más distantes del espíritu capitalista.

En contra de lo que también se cree, EE.UU. no tuvo a lo largo del siglo XIX una política de expansión imperial que buscara construir colonias o dominios lejos de su territorio. El célebre discurso de despedida (1796) del primer presidente, George Washington, abogó por una política aislacionista que diera a EE.UU. las ventajas de no participar en los intensos e inútiles conflictos europeos, subrayando su potencialidad como la primera de las nuevas naciones y asegurando a sus habitantes que debían cuidar la ventaja de vivir en la sociedad mejor organizada de la tierra. En verdad, todo el siglo XIX estuvo dedicado a ampliar las fronteras internas hasta llegar a tener el gigantesco territorio que acabó con la compra de Alaska a Rusia en 1867. La

obtención de Louisiana, por parte de Napoleón y de Florida, por España, la integración de Oregon, y, sobre todo, las enormes superficies arrebatadas a México en California, Texas, Arizona y Nuevo México en la guerra de 1846 y mediante el Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848, fueron, junto a la conquista del Oeste, un instrumento para desarrollar un país de dimensiones continentales (del Atlántico al Pacífico) y generar la base material de la futura superpotencia.

La doctrina Monroe de 1823, que rechazaba toda presencia de las potencias europeas en suelo americano, fue así una verdadera “cláusula de reserva” para posibilitar operaciones futuras (Merk, 1966). Todos los proyectos de invasión y anexión propuestos principalmente por los estados sureños para Cuba o Jamaica fueron descartados en un momento en que prevalecían las tensiones internas que sólo se resolvieron con la guerra civil y el triunfo del Norte en 1865. A partir de ese momento se empieza a edificar la política exterior de EE.UU. sentando las bases para la primera expansión imperial, que tendrá lugar a través de la guerra contra España de 1898.

Por esa época, EE.UU. se había convertido en la primera potencia industrial del mundo (condición que alcanza en 1894), y la reticencia ante una presencia internacional más amplia comenzaba a desvanecerse. El poder imperial norteamericano se estableció por etapas, y su primer círculo de expansión estuvo en América Central y el Caribe (Blassier, 1985). La presencia de Theodore Roosevelt en la Casa Blanca fundó una etapa completamente nueva, más dura y agresiva, la llamada política del “Gran Garrote”. A la virtual anexión de Puerto Rico le siguió la intervención de Cuba a través de la Enmienda Platt y luego la activa presencia de los marines que desembarcaron en República Dominicana, Haití y Nicaragua en abierto respaldo a las inversiones norteamericanas. En las primeras décadas del siglo XX se establecieron férreos protectorados que incluyeron la administración estadounidense de puertos, aduanas y servicios tributarios para asegurar el cobro de las deudas pendientes a través de procesos de ocupación que duraron largo tiempo. En el lenguaje de la época, “la diplomacia del dólar” se combinó intensamente con “la diplomacia de las cañoneras”.

Las cosas sólo cambiaron cuando el contexto mundial se modificó. En 1933 el presidente Franklin Delano Roosevelt, bajo la presión de los efectos de la Gran Depresión y frente a un horizonte de tensiones que condujeron a la Segunda Guerra Mundial, buscó establecer una relación más cooperativa con los países latinoamericanos, que le asegurara un buen apoyo a EE.UU. en caso de entrar, como ocurrió, en

conflicto con las potencias del Eje. Esto dio origen a la llamada “política del buen vecino”, proclamada en la Conferencia Panamericana de Montevideo, que suspendió las acciones de fuerza y retiró todos los efectivos norteamericanos del área (Wood, 1961). Luego, situaciones que en otro contexto habrían originado una respuesta muy dura, como la expropiación petrolera del presidente Lázaro Cárdenas en México, en marzo de 1938, o el triunfo del Frente Popular en Chile en octubre de ese mismo año, dieron lugar a negociaciones y reacomodamientos raras veces vistos.

Así, se podría decir que la fase uno de la activa presencia imperial de EE.UU. en América Latina constituyó la etapa más descarnada, testigo de la intervención política y económica más sistemática, que no excluyó, al menos temporalmente, la ocupación de países. El fin de este período se caracterizó por una actitud más abierta en función de sus intereses globales y esto permitió que la mayoría de los países apoyaran efectivamente a los aliados, y en particular a EE.UU., durante el siguiente conflicto, entregando sus materias primas y productos estratégicos a precios preferenciales y, en el caso de los países más grandes como Brasil y México, incluso enviando a los frentes de guerra una pequeña cantidad de tropas.

AMÉRICA LATINA Y LA POLÍTICA DE CONTENCIÓN DURANTE LA GUERRA FRÍA

La etapa de la Guerra Fría entre 1945 y 1989 marca un segundo período en las relaciones, más cercano y decisivo para determinar el perfil y contenido de las políticas actuales (Lafeber, 1971; Vadney, 1992; Nitze, 1989; Deibel y Gaddis, 1986). La emergencia del mundo bipolar y el conflicto sistemático con la Unión Soviética y el campo comunista determinaron un nuevo perfil de las alianzas y conflictos donde el choque de civilizaciones, según la acepción que daba a este término el experto neoconservador Norman Podhoretz (1980) –elegir entre el modo de vida de EE.UU. o el de la URSS–, fue la piedra angular para calibrar, durante casi cinco décadas, el trato que recibieron los países latinoamericanos.

Ahora bien, el término de la Segunda Guerra Mundial coincide con la época de mayor poderío alcanzado por EE.UU. en toda su historia. Habitado a la ventaja de no librar guerras en territorio propio y de hacer de ellas un factor de reforzamiento económico, EE.UU. tenía en 1945, con menos del 5% de la población del planeta, el 35% del PIB mundial, el 47% de la capacidad industrial total, el 22% de las exporta-

ciones de la economía mundial y el 50% del stock de inversiones privadas. En semejante contexto, el disciplinamiento de las economías latinoamericanas operó paralelamente con el fuerte control político de los gobiernos. El anterior y laxo Sistema Panamericano se convirtió en 1948 en la Organización de Estados Americanos (OEA), considerada por sus críticos como el “Ministerio de Colonias de Estados Unidos para América Latina”. Un año antes, en septiembre de 1947, se había constituido en Río de Janeiro el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), la primera de las alianzas militares regionales constituidas por EE.UU., que precedió en dos años a la OTAN. Conforme al artículo V de este instrumento jurídico, los firmantes del texto debían darse apoyo mutuo con sus efectivos militares en caso de que uno de los suscriptores fuera objeto de “una agresión extra-continental”. De este modo, los países latinoamericanos quedaban obligados de antemano a apoyar a EE.UU. en caso de un eventual conflicto con la URSS –una tercera Guerra Mundial– que la mayoría de los expertos de Washington consideraba inevitable para mediados de los años cincuenta. A esto se agregó, además, una Convención para la proscripción del comunismo en el hemisferio, acordada en la Conferencia de Caracas en 1954. Como nunca antes, América Latina se reconocía parte de un estrecho y sólido bloque de apoyo a la política exterior norteamericana.

Para esas fechas el quehacer internacional de Washington se había tornado, a su vez, mucho más complejo. Hasta 1939 existía una política exterior norteamericana que el Departamento de Estado coordinaba por completo. Desde 1945 en adelante opera, en cambio, una suerte de colección de estrategias externas manejadas por diversas agencias del gobierno. La primera en manifestarse fue la política económica internacional que originó los principales diseños preparatorios de las reuniones de Teheran, Yalta y Postdam con las que los vencedores definieron las esferas de influencia y el nuevo orden mundial entre 1943 y 1945. La segunda en importancia fue la política de defensa y seguridad, cuyas reglas de juego se incluyeron en la *National Security Act* de 1947. Pero luego aparecieron otros numerosos campos específicos, como la política exterior agrícola para la colocación de sus enormes excedentes agropecuarios; la política exterior energética para garantizar el abastecimiento de petróleo y el control de sus fuentes en los países en desarrollo; la política exterior de transporte para asegurar la preeminencia de sus empresas en el campo aeronáutico y marítimo. Más tarde irrumpieron las políticas exteriores relativas al medio ambiente y al desarrollo social. En todas estas nuevas esferas, el

Departamento de Estado tiene muy poco que ver, de tal forma que la aplicación de los intereses externos de EE.UU. corresponde ahora a un intrincado laberinto de departamentos, circuitos de toma de decisión y agencias donde operan en forma cruzada las dinámicas de colaboración y conflicto (Destler, 1974; Molineu, 1986).

América Latina ha sido un escenario más de esta complejidad, lo que ha hecho que en ciertas coyunturas las decisiones concretas para un determinado país salieran por completo de la esfera diplomática, como ocurrió en los años ochenta con Honduras en ocasión de la crisis centroamericana. Ese país, el más pobre de la subregión, fue considerado casi un “portaaviones terrestre” para movilizar, bajo los dictados del Departamento de Defensa, las influencias y recursos norteamericanos en los conflictos civiles de Nicaragua, El Salvador y Guatemala.

A lo largo de las últimas décadas, en el área latinoamericana se aplicó en forma rigurosa la estrategia de contención que sirvió de base al diseño internacional norteamericano de la Guerra Fría. Las diversas situaciones nacionales fueron pasadas por el tamiz de su impacto en el balance global entre EE.UU. y la URSS. Por la misma razón, otra variante estructural muy importante de las determinaciones en Washington fue la distinción entre situaciones de normalidad y cuadros de crisis, correspondiendo estos últimos a situaciones de ascenso de las fuerzas de izquierda o a conductas de cercanía a las posturas soviéticas en un determinado país. Mientras las situaciones normales originaban muy pocas iniciativas y estaban a cargo de un *Country Director* (funcionario de tercer nivel que llevaba los asuntos de un país latinoamericano) los cuadros de crisis originaban lo que se conocía como un caso testigo. En tales circunstancias, el nivel de toma de decisiones aumentaba y se incrementaba la coordinación para medir el impacto de todas las acciones impulsadas por el gobierno norteamericano.

En las cinco décadas que duró la Guerra Fría, hubo sólo dos grandes situaciones emanadas de la región que tuvieron impacto global en la estrategia norteamericana. La primera fue la Revolución Cubana en 1959, que concretó las peores pesadillas del Departamento de Estado al llevar a un país del hemisferio al comunismo y la asociación directa con la URSS¹ (curiosamente la situación de Cuba sigue

¹ Las relaciones con Cuba, y en particular el conflicto de los misiles de octubre de 1962, originaron un texto clásico sobre el proceso de toma de decisiones de la política exterior norteamericana titulado *Essence of decision* de Graham Allison (New York: Little, Brown & Co., 1971).

siendo objeto de las mismas políticas restrictivas, como el embargo económico y la Enmienda Helms-Burton, pese al fin de la Guerra Fría y al abandono de sus contenidos en todo el resto del mundo). La segunda fue la gran crisis política que estalló en América Central tras el derrocamiento del dictador Anastasio Somoza hijo en Nicaragua, en julio de 1979 (Fagen y Pellicer, 1983). Esta situación se extendió como una “bomba racimo” a los países vecinos, conectándose con otros sangrientos conflictos internos que contrapusieron a militares apoyados por EE.UU. con las organizaciones armadas del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) en El Salvador y los grupos guerrilleros guatemaltecos agrupados en la Unión para la Resistencia Nacional Guatemalteca (URNG). En este caso se aplicó la propuesta teórica realizada por el secretario de Estado Henry Kissinger, conocida como “efecto dominó”. Esta sostenía que en la lucha contra el comunismo no había países de segundo o tercer nivel, porque la caída bajo influencia soviética de un país pequeño podía originar el efecto encadenado de nuevas pérdidas más importantes, lo que obligaba a establecer barreras y evitar tomas de poder por parte de los comunistas en cualquier lugar.

Otro caso significativo en esos años, también dominado por el temor a una expansión del comunismo, fue el derrocamiento del régimen del coronel Jacobo Arbenz en Guatemala, que puso término a la llamada Revolución Democrática iniciada en 1944 bajo la acusación de una creciente influencia del pequeño Partido Comunista en el país, pero en verdad motivado por las amenazas de una reforma agraria que podía privar de parte de sus tierras a la poderosa empresa norteamericana *United Fruit Company*. Luego se dio la invasión de República Dominicana en 1965 para contener la posible influencia cubana sobre el gobierno encabezado por el coronel Francisco Camaño, en el momento político posterior al asesinato del emblemático dictador Rafael Leónidas Trujillo en ese país. Y finalmente, la activa participación norteamericana en el agudo enfrentamiento político que precedió al golpe de estado chileno del 11 de septiembre de 1973, que puso término a la democracia en ese país y le costó la vida al presidente Salvador Allende.

En general, se puede sostener que los organismos que formulan la política exterior hacia América Latina no intentaron trabajar con visiones articuladas o proyectos específicos. Ello sólo se produjo cuando sintieron sus intereses amenazados globalmente por algún proceso en la región o cuando estos llegaron a tener cierto impacto electoral.

En esos casos se formularon propuestas como la Alianza para el Progreso, del presidente John F. Kennedy; la Política sobre Derechos Humanos de la administración Carter, o la Iniciativa para las Américas del presidente George Bush padre, que más tarde Bill Clinton convertiría en la propuesta de la Asociación de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que debía entrar en vigencia en 2005 y actualmente atraviesa una compleja discusión. Se debe añadir que usualmente estas visiones más ambiciosas entraron en conflicto con el ritmo más rutinario de los funcionarios de carrera del Departamento de Estado, por lo que en la práctica no llegaron a concretarse.

Si se excluyen estos episodios, la relación entre EE.UU. y América Latina fue de una normalidad basada en la subordinación o el acatamiento de los países de la región a los lineamientos de las políticas implantadas en Washington. Aunque hubo una permanente declaración de adhesión de los titulares de la Casa Blanca a los principios de la democracia representativa consagrados expresamente en la Carta de la OEA, en la práctica EE.UU. ayudó a establecer, o apoyó, muchos regímenes dictatoriales que se apartaban abiertamente de tales criterios, con el argumento de hacer prevalecer sus intereses nacionales. El ejemplo más significativo de esta línea fue el patrocinio a las llamadas “dictaduras militares de seguridad nacional”, mucho más represivas y sistemáticas que las tradicionales. En torno a concepciones surgidas en el Colegio Nacional de Guerra de Estados Unidos y a la denominada Doctrina de Seguridad Nacional –una contraideología del comunismo que aconsejaba a los militares la captura del poder político y la aplicación de refundaciones de carácter conservador en sus países–, se instalaron en los años sesenta y setenta regímenes militares en Brasil, Bolivia, Uruguay, Argentina y Chile (Rouquié, 1982), que actuaron estrechamente coordinados en un diseño de terrorismo de estado para extirpar a las organizaciones políticas y sociales disidentes y reorganizar la economía bajo las pautas de un modelo neoliberal.

EL CAMBIANTE ESCENARIO DE LA POST GUERRA FRÍA Y LA GLOBALIZACIÓN

A partir del término de la Guerra Fría, las relaciones entre EE.UU. y América Latina entraron en una tercera etapa, cuya racionalidad es también completamente distinta a las anteriores. El tiempo de la post Guerra Fría y de la globalización originó ese “cambio de época”

que tanto han subrayado los historiadores y trajo efectos enormes en el estilo y los contenidos de la política hemisférica. Del orden rigurosamente bipolar de la política de bloques, pasamos a una heterogénea situación en la que el sistema internacional es unipolar en las esferas militar y comunicacional pero bastante más abierto y multipolar en los ámbitos económico y político (Nye, 2002). Para una región subordinada como América Latina, el aumento en la sensación de poder de los gobernantes de Washington se ha hecho sentir con toda su fuerza.

Más allá del equívoco efecto que podría sugerir la búsqueda de un acuerdo de libre comercio regional, la marginalidad y falta de significación de los países situados al sur del Río Bravo ha sido manifiesta, lo que ha redundado en una fragmentación y opacidad de la política de EE.UU. El cambio de la imagen del mundo luego del fin de la URSS y el mundo comunista, y luego de las inmensas transformaciones científico-técnicas que han acompañado a la tercera revolución industrial, ha producido, por otra parte, un efecto de estupefacción en los núcleos dirigentes latinoamericanos, que han visto estos inmensos cambios como una mera crisis coyuntural esperando sin éxito que las cosas volvieran a la anterior normalidad.

Por su parte, América Latina como región ha experimentado transformaciones de gran magnitud y es ahora muy distinta de lo que era hace apenas dos décadas. Las dictaduras han desaparecido y se han instalado regímenes democráticos con procesos electorales bastante transparentes en cuanto a la generación de las autoridades. Pero esto no ha traído cambios perceptibles en las condiciones de vida de las grandes mayorías y, por variadas y complejas razones, se ha llegado a un cuadro de desencanto democrático. El analista argentino Guillermo O'Donnell ha hablado con propiedad de "democracias de baja intensidad", cuyos gobiernos, parlamentos y partidos políticos son calificados pobremente por la sociedad, generando un proceso de creciente abstención en las elecciones y una pérdida de legitimidad de su desempeño.

Paralelamente, la región se ha hecho aún más pobre y desigual, acentuando sus peores rasgos históricos. Según las cifras de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), en 1980 había en los países latinoamericanos y del Caribe 130 millones de personas pobres. En 1990, luego de la llamada década pérdida y de los problemas ocasionados por el estallido de la crisis de la deuda externa, la cifra subió a 190 millones. En 2002, pese a las expectativas iniciales de

un mejoramiento de la situación en los noventa, la cantidad de pobres volvió a crecer hasta alcanzar los 210 millones. Esto hace que un 44% de los habitantes de América Latina hoy sean pobres.

A la par, se ha mantenido o reforzado la desigualdad. América Latina es, de antiguo, la región con menos equidad en el mundo en desarrollo. Y este rasgo se ha vuelto a reforzar por los efectos negativos del proceso de globalización y las carencias de recursos públicos originadas por los programas de ajuste inspirados por el FMI, que han reducido los fondos destinados a políticas sociales. En promedio, en América Latina el 10% más pobre de la población no alcanza a percibir el 2% del Ingreso Nacional (de 1,8 a 1,9% según los años), mientras el 10% más rico supera el 41% del mismo. El caso más extremo es el país más grande del área, Brasil: allí el primer decil apenas sobrepasa el 1% de los ingresos totales mientras el decil de los más acomodados se acerca al 60% del conjunto de los ingresos totales.

A ello se suma un sensible aumento en la heterogeneidad social y productiva de los mayores países, que incrementa las diferencias internas entre las principales agrupaciones subnacionales. Un reciente informe ha hablado de “cinco México” (Pacific Council on International Policy, 2000), mientras que en Brasil se puede trazar un gigantesco rectángulo de pobreza que va desde la ciudad de Fortaleza junto al Atlántico, en el norte, hasta Manaus al interior del Amazonas, baja por la selva hasta la altura del estado de Minas Gerais y se interna hacia el litoral pasando por Belo Horizonte y Vitória. En los varios millones de kilómetros cuadrados que este espacio encierra, están algunas de las comunidades más pobres del continente. Por el contrario, el Brasil del centro y del sur es más moderno y matizado en los estados de Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Santa Catarina o Rio Grande do Sul. Allí se concentran el poderío industrial, los servicios y las actividades de última generación. Al igual que en México, entre los estados más prósperos y los más pobres cualquier paquete de indicadores sociales muestra diferencias que van de 1 a 3 o más. En la América Latina de hoy, la existencia de varios países en un mismo territorio nacional origina gigantescas tensiones sociales y problemas muy serios de gobernabilidad. Y esto es algo que puede extenderse a todos los países no desarrollados homogéneamente, como es el caso de Argentina, Chile, Colombia y Venezuela, entre otros. En una comparación de casos, las naciones latinoamericanas están mucho más lejos unas de otras que hace 50 años. Lo homogéneo está ahora en las subregiones: el área centroamericana, la del Caribe, la subregión andina o el Cono Sur,

quedando México –con todas las complejidades de una frontera común con EE.UU. de 3.200 km y un Tratado de Libre Comercio que ha concentrado el comercio exterior con el Norte en más de un 85%– como una región en sí mismo.

EE.UU., desde el fin del campo comunista, ha inaugurado una política más displicente hacia los países del Sur de su hemisferio. Alguna vez el experto internacional y ex canciller mexicano Bernardo Sepúlveda llamó a estas épocas “tiempos carentes de políticas hacia América Latina”. Ello, como hemos sugerido, se ha presentado en muchos momentos previos. Pero ahora la distancia y el desinterés estadounidenses parecen tener un horizonte más estratégico, a menos que una tremenda hecatombe social estremezca al continente. Tal tendencia se ha reforzado luego del cambio de escenario internacional que siguió a los atentados del 11 de septiembre de 2001². De ahí en adelante, la lucha contra el terrorismo, y las acciones preventivas contra los estados que presuntamente lo amparan, lo dominan todo. Se trata de un esquema bastante remoto en cuanto a su impacto en esta región. Sólo las preocupaciones iniciales, luego descartadas, por la posible existencia de núcleos radicales islámicos en Ciudad del Este y en la triple frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil, o el sellamiento de las fronteras de México en el norte y en el sur de su territorio, tienen algo que ver con ese esquema. El resto pasa por la crítica situación colombiana y las acciones de su gobierno contra las organizaciones armadas FARC y ELN y contra los núcleos de traficantes de cocaína, donde el Pentágono impulsa el Plan Colombia, o el posible resurgimiento de Sendero Luminoso en Perú que podría originar acciones equivalentes. Lo demás queda fuera de la preocupación central y de las prioridades norteamericanas, por más que situaciones dramáticas como la crisis argentina de diciembre de 2001 o el aumento de la miseria en América Central enciendan el sistema de alarmas amenazando con crecientes conflictos políticos y explosiones sociales.

Esto explica que muchos hechos significativos estén ocurriendo sin que EE.UU. les preste mayor atención. El nuevo gobierno brasileño del presidente Luiz Inácio Lula da Silva por primera vez da acceso al poder a una fuerza claramente de izquierda como el Partido de los Trabajadores. En Argentina, el nuevo jefe de estado, Néstor Kirchner,

2 Para una buena comprensión de las percepciones latinoamericanas acerca del impacto producido por los atentados de Washington y Nueva York de septiembre de 2001, ver Valdés y Valdés (2002) y VV.AA (2003).

sorprende con medidas radicales que reorganizan el Poder Judicial, combaten la corrupción y derogan las leyes de Punto Final en materia de derechos humanos. En Uruguay, el Frente Amplio y su líder Tabaré Vázquez reciben más del 50% de las preferencias en las encuestas a apenas un año de las próximas elecciones presidenciales, lo que amenaza con poner término a casi un siglo y medio de hegemonía de los partidos tradicionales Blanco y Colorado. En Chile, desde marzo de 2000, gobierna Ricardo Lagos, un presidente socialista, y su sector ha pasado a ser mayoritario dentro de la amplia coalición que desplazó del poder al general Pinochet y dirige al país desde 1990. En El Salvador muchos analistas creen que esta vez el partido oficialista Arena será desplazado del poder y reemplazado por un candidato de centroizquierda o de izquierda. En México, por su parte, todas las encuestas que exploran las tendencias para las próximas elecciones de junio de 2006 señalan en primer lugar al jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, del Partido de la Revolución Democrática.

Todo lleva a concluir que en la América Latina de hoy lo que está pasando adentro es más importante que sus relaciones con EE.UU., y que a Washington le queda poco tiempo para prestar atención al nuevo escenario que emerge.

BIBLIOGRAFÍA

- Allison, Graham 1971 *Essence of Decision* (New York: Little, Brown & Co.).
- Blassier, Cole 1985 *The hovering giant: US responses to revolutionary change in Latin America, 1910-1985* (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press).
- Deibel, Terry L. and Gaddis, John Lewis 1986 *Containment: concept and policy* (Washington DC: National Defense University Press).
- Destler, Irving 1974 *Presidents, bureaucrats and foreign policy* (New Jersey: Princeton University Press).
- Fagen, Richard and Pellicer, Olga 1983 *The future of Central America* (Stanford: Stanford University Press).
- Hanke, Lewis 1964 *Do the Americas have a common history?* (New York: Alfred A. Knoff).
- Hartz, Louis 1955 *The liberal tradition in America* (New York: Harcourt Brace Jovanovich).
- Lafeber, Walter 1971 *The origins of the Cold War* (New York: John Wiley & Sons).
- Merk, Frederick 1966 *The Monroe Doctrine and american expansionism* (New York: Alfred A. Knoff).

- Molineu, Harold 1986 *US Policy toward Latin America* (Boulder: Westview Press).
- Nitze, Paul 1989 *From Hiroshima to Glasnost. At the center decision* (London: Intercontinental Literary Agency).
- Nye, Joseph 2002 *The paradox of American power* (Cambridge: Harvard University Press).
- Pacific Council on International Policy 2000 *Mexico Transforming* (Los Angeles).
- Podhoretz, Norman 1980 *The present danger* (New York: Simon & Schuster).
- Rouquié, Alain 1982 *L'état militaire en Amérique Latine* (Paris: Éditions du Seuil).
- Vadney, T. E. 1992 *The world since 1945* (London: Penguin Books).
- Valdés, José Luis y Valdés, Diego (eds.) 2002 *Globalidad y Conflicto: Estados Unidos y la crisis de septiembre* (México DF: UNAM).
- VV.AA. 2003 "EUA e a Ordem Mundial: uma nova doutrina?" em *Política externa* (São Paulo) Vol. 12, N° 1.
- Wood, Bryce 1961 *The making of the good neighbor policy* (New York: Columbia University Press).